

JUDGMENT OF THE SUPREME COURT

Emilio M.B. (individual) v. Embassy of Guinea Ecuatorial (State)

Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 10 febrero 1986

Recurso de casación por infracción de ley.

Jurisdicción: Social

Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Antonio del Riego Fernández

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Son antecedentes que interesa destacar, a efectos de decidir sobre la competencia del orden social de la jurisdicción española para conocer de la demanda, que el actor, de nacionalidad española el 1 de noviembre de 1983 inició la prestación de sus servicios en Madrid, por cuenta y bajo la dependencia de la Embajada de Guinea Ecuatorial, como conductor, con el salario mensual, incluido prorrateo de gratificaciones, de 102.049 pesetas mensuales, que fue dado de alta en la Seguridad Social española, y que se pretende en dicha demanda que el despido que afirma le fue comunicado verbalmente el 26 de agosto de 1984 sea declarado nulo o improcedente, con condena de la Embajada a la readmisión y abono de los salarios de tramitación correspondientes.

SEGUNDO.- La sentencia recurrida declara la incompetencia de la jurisdicción española, lo que fundamenta en el artículo 31 del Convenio de Viena de 18 de abril de 1961, al que se adhirió España por Instrumento publicado en el Boletín Oficial del Estado de 24 de enero de 1968, y en determinados precedentes judiciales, concretamente la sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 17 de enero de 1980; no cabe desconocer la existencia de dicho precedente, que no es único, pues aparte de otras sentencias de ese Tribunal -9 de noviembre de 1968, 14 de octubre de 1975, 25 de noviembre de 1976 y 21 de abril de 1978-, es de mencionar la de esta Sala de 8 de noviembre de 1979.

TERCERO.- No debe sin embargo mantenerse en el presente caso la misma solución, de una parte porque implicaría una aplicación, más que extensiva, analógica, del mencionado Convenio atribuyendo la inmunidad que otorga al Agente diplomático a título personal, al Estado que representa, y de otra el reconocimiento de la subsistencia de un principio básico o de una norma consuetudinaria universal de Derecho internacional, según la que un Estado soberano no puede ser sometido a los Tribunales de otro, cuando la vigencia de ese principio básico, que fue históricamente aceptado, está siendo cuestionado en la actualidad por la doctrina científica en base a la realidad internacional que permite comprobar cómo los Tribunales de Estados extranjeros vienen decidiendo en la esfera de los «acta jure gestionis» -aunque no en la de los «acta jure imperi»- cuestiones que afectan (al margen por tanto de los litigios entre Estados como sujetos de Derecho Internacional Público sometidos a los Tribunales internacionales) a otros Estados soberanos y concretamente al español.

CUARTO.- Es altamente significativo en dicho sentido el Real Decreto 1654/80 de 11 de julio, sobre Servicio Contencioso del Estado en el Extranjero, que en su exposición de motivos afirma «la doctrina de la inmunidad absoluta de jurisdicción puede considerarse ya en su etapa final» y «hoy en día la mayor parte, sino la totalidad de los Estados, aceptan la teoría restringida de la inmunidad de

jurisdicción, lo que ha producido un aumento de litigios en los que el Estado o sus Organos, son parte ante una jurisdicción extranjera», por lo que en su articulado establece las normas de defensa y actuación del Estado español cuando es demandado ante Tribunales extranjeros. **Por todo ello, al igual que cualquiera otro Estado, el de Guinea Ecuatorial, del que su Embajada forma parte, no disfruta de inmunidad absoluta, en relación a las reclamaciones que le dirijan los súbditos españoles contratados para prestar servicios en nuestro país; no puede inhibirse tampoco del conocimiento de la demanda la jurisdicción española con fundamento en el Convenio de Viena, pues como ha quedado dicho, sólo otorga inmunidad a los Agentes Diplomáticos extranjeros a título personal, es decir en cuanto titulares de derechos, y no al Estado que representan al que sólo se podría extender esa inmunidad absoluta en aplicación de una doctrina consuetudinaria, que, como se ha visto, ha caído en desuso.**

QUINTO.- De acuerdo con lo razonado y teniendo también fundamentalmente en cuenta lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Española, los principios que inspiran el hoy vigente artículo 25.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 1 y concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral, ha de declararse la competencia de la jurisdicción española para el conocimiento de la demanda, con estimación del recurso en que así se postula, la casación y anulación de la sentencia recurrida y devolución de las actuaciones a la Magistratura de procedencia a fin de que, con plena libertad de criterio, se dicte nueva resolución en cuanto al fondo del asunto. No obstante, como cabría la posibilidad de la subsistencia de una inmunidad relativa o residual, que puede tener incidencia en la fase de ejecución, si la sentencia que se dicte fuere condenatoria, la Magistratura de instancia, antes de acordar la práctica de cualquier medida concreta de ejecución forzosa, deberá recabar, exponiendo las modalidades de ejecución que la parte sugiera, informe de la Asesoría Jurídica a que se refiere el artículo 7 del Real Decreto 1654/80, a fin de que en dicha ejecución se observen los acuerdos bilaterales, y usos o prácticas internacionales vigentes sobre el particular, debiendo a los efectos de determinar la existencia de reciprocidad dirigirse al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, por conducto del Consejo General del Poder Judicial, conforme al artículo 268-2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.